

Santiago, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

**Vistos:**

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus motivos décimo tercero a décima séptimo, que se eliminan.

Se reproducen, asimismo, los razonamientos cuarto a séptimo del fallo de casación que antecede.

**Y se tiene en su lugar y, además, presente:**

1° Que esta Corte ha señalado reiteradamente que la falta de servicio "se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del Servicio en relación a la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello concurre cuando aquel no funciona debiendo hacerlo y cuando funciona irregular o tardíamente, operando así como un factor de imputación que genera la consecuente responsabilidad indemnizatoria, conforme lo dispone expresamente el artículo 42 de la Ley N° 18.575" (Corte Suprema, Rol 9.554-2012, 10 de junio de 2013, considerando undécimo). En este sentido, habrá de resaltarse que la omisión o abstención de un deber jurídico de la Administración generará responsabilidad para aquella si se trata del incumplimiento de un deber impuesto por el ordenamiento jurídico. En otras palabras, cuando se constate la ausencia de actividad del



órgano del Estado debiendo existir aquélla, disponiendo de los medios para ello.

En materia municipal, el principio anterior se halla plasmado en el artículo 152 de la Ley N°18.695, conforme al cual: *"Las municipalidades incurrirán en responsabilidad por los daños que causen, la que procederá principalmente por falta de servicio"*.

2° Que la falta de servicio que se configura en la especie, radica en que el Liceo Politécnico Irineo Badilla Fuentes, cuyo sostenedor es la Municipalidad de Linares, incumplió con su deber de velar por la seguridad y la integridad física y psíquica de sus alumnos, al no adoptar las medidas que impidieran de manera eficaz que el día 27 de agosto de 2014 el alumno N.E.L.A. mantuviera una discusión con Cristian San Martín Alvial, amenazándolo de muerte. Luego, el primero de ellos abandonó el colegio por una vía no destinada al efecto, manteniéndose ausente de clases por un lapso de, a lo menos, dos horas. Transcurrido dicho tiempo, el pupilo vuelve al establecimiento portando un arma de fuego, oportunidad en la cual materializa su amenaza y dispara contra Cristian San Martín, causándole heridas que le provocan la muerte el mismo día.

3° Que el buen funcionamiento del establecimiento educacional Liceo Politécnico Irineo Badilla Fuentes, dependiente de la demandada, implicaba en este caso que sus funcionarios realizaran todas las acciones tendientes a de



velar por la seguridad de los alumnos, empleando el cuidado necesario para prevenir eficazmente que quedaren expuestos y sin vigilancia ante otros miembros de la comunidad educativa que pudieren agredirlos. En otras palabras, el administrador del establecimiento educacional debía aplicar un cuidado elevado con miras a proteger la vida e integridad de sus estudiantes, al tenor de lo dispuesto en los artículos 10, 16 C y 16 D de la Ley N°20.370, los cuales tienen como contrapartida el derecho de los alumnos a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral.

En efecto, los funcionarios del liceo no advirtieron la existencia de una discusión entre los dos alumnos en horas de la mañana, como tampoco tomaron medidas ante la advertencia de que uno de ellos se había fugado del establecimiento, todo lo cual derivó en que tampoco se tomara noticia de su regreso por una vía no destinada al efecto y portando un armamento de fuego, todo lo cual habría evitado que Cristian San Martín sufriera las lesiones que finalmente llevaron a su fallecimiento, omisiones que implican un mal funcionamiento del establecimiento, configurándose así una falta de servicio en los términos de los artículos 4 y 42 de la Ley N°18.575.

4° Que, en estas condiciones, la falta de servicio anteriormente anotada importó el fallecimiento de uno de los alumnos, en dependencias del establecimiento



educacional y mientras se encontraba bajo el cuidado de la demandada.

5° Que la actora es la madre del estudiante fallecido y refiere que estos hechos le han causado un daño moral producto de la muerte de uno de sus hijos que, en esa fecha, tenía 18 años. Sobre el particular, declaran cuatro testigos, quienes de manera conteste refieren un cambio emocional luego de ocurridos estos hechos, no sólo en la actora sino también en su grupo familiar. En particular, la demandante ha requerido tratamiento psicológico y medicamentos al igual que uno de sus hijos.

Explica uno de los deponentes que el occiso era el hijo mayor, lo cual motivó alteraciones conductuales en toda la familia, puesto que se trataba de quien cuidaba a sus hermanos de 15, 12, 10 y 3 años y ayudaba a su madre con las labores del hogar.

6° Que, sobre este último tópico, resulta necesario consignar que, si bien en nuestra legislación no se encuentra un concepto unívoco de lo que se entiende por daño moral, su acepción más restringida elaborada por la doctrina se relaciona con el pesar, dolor o aflicción que experimenta la víctima y que se conoce como *pretium doloris*. Sin embargo, esta visión ha dado paso, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, a considerar una concepción más amplia de tal concepto, a fin de reparar todas las especies de perjuicios morales y no sólo el



*pretium doloris*, toda vez que en cada una de ellas hay atentados a intereses extrapatrimoniales diversos.

Así, la profesora Carmen Domínguez Hidalgo ha manifestado sobre el punto: "*Estamos con aquellos que conciben el daño moral del modo más amplio posible, incluyendo allí todo daño a la persona en sí misma -física o psíquica-, como todo atentado contra sus intereses extrapatrimoniales. Comprende pues el daño moral todo menoscabo del cuerpo humano, considerado como un valor en sí y con independencia de sus alcances patrimoniales*". Y agrega: "*En suma, el daño moral estará constituido por el menoscabo de un bien no patrimonial que irroga una lesión a un interés moral por una que se encontraba obligada a respetarlo*". (En "El Daño Moral", tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 2002, páginas 83 y 84).

7° Que, en el caso concreto, el daño moral que alega la demandante consiste, equivale y tiene su fundamento en la angustia y desconsuelo que ha debido soportar como consecuencia del deficiente e irregular servicio que la demandada prestó en relación al resguardo de la integridad de su hijo, quien era alumno regular del liceo Irineo Badilla Fuentes, dependiente de la Municipalidad de Linares, lo cual se tradujo en su muerte inesperada, con el dolor, sufrimiento y detrimento emocional que ello supone para una madre, a la vez que alteró sus planes y



condiciones de vida en las condiciones descritas más arriba.

Dichos padecimientos proceden directamente del actuar imperfecto de la demandada en el cumplimiento de sus obligaciones legales, de manera ha quedado establecida la existencia de un vínculo causal entre la falta de servicio en que incurrió el demandado y el resultado dañoso sufrido por la actora, consistente en el perjuicio moral cuya compensación demanda; el cual estos sentenciadores estiman prudencialmente resarcido con la cantidad de \$50.000.000 (cincuenta millones de pesos).

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil, **se revoca** la sentencia apelada de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, escrita a fojas 377 y siguientes, y, en su lugar, se declara que **se acoge** la demanda deducida en lo principal de fojas 1 sólo en cuanto se condena a la Municipalidad de Linares a pagar a la demandante la cantidad de \$50.000.000 (cincuenta millones de pesos) por concepto de daño moral.

Dicha cantidad deberá solucionarse reajustada de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor desde la fecha de esta sentencia y hasta la del pago efectivo, más el interés corriente para operaciones reajustables que devengue la señalada suma de dinero desde que el deudor incurra en mora, en el evento que ello acontezca, y hasta su pago efectivo.



Acordada con el **voto en contra** del Ministro señor Aránguiz y el Abogado Integrante señor Lagos, quienes estuvieron por confirmar el fallo apelado y rechazar la demanda interpuesta, en virtud de lo indicado en la disidencia del fallo de casación que antecede.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Prado y la disidencia, de sus autores.

Rol N° 23.078-2018.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (a) Sra. María Eugenia Sandoval G., Sr. Carlos Aránguiz Z., Sr. Arturo Prado P. y los Abogados Integrantes Sr. Jorge Lagos G. y Sr. Antonio Barra R. No firman, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, el Ministro señor Aránguiz por estar con licencia médica y el Abogado Integrante señor Barra por haberse ausentado. Santiago, 25 de octubre de 2019.



Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

